

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Valledupar, 23 septiembre 2019

Ante los hechos delictivos que vienen ocurriendo en Valledupar de meses atrás, la circulación de panfletos en redes sociales que han generado terror en muchos sectores de la ciudadanía y el artículo de Semana.com. <Valledupar, bajo fuego> del pasado 20 de septiembre, confieso que estoy realmente conmocionado, tanto en mi condición de ciudadano, como de abogado:

Primero. Por el atentado del que fui víctima el 25 de febrero de este año, cuando sicarios me dispararon junto con mi esposa, y a pesar del estado crítico en que quedé, por causa de varias balas que me impactaron en el pecho, fue salvada mi vida, gracias a la misericordia de DIOS, con la oportuna y eficiente atención médica en la clínica Cardiovascular.

Segundo. Por las amenazas en subsiguientes pasquines donde me señalan de manera temeraria e infame como coautor de actos de corrupción, testaferrato y usurpación de tierras en complicidad con grupos delictivos.

Tercero. Porque lo anterior, ha puesto en cuestión los bienes más preciados de un ser humano: mi vida e integridad física y la de mi familia, mi dignidad, mi honor personal, mi reputación profesional. Además, en un estado de degradación tremenda, porque esas falsas imputaciones que me hieren, comportaría la más triste negación de todos los compromisos deontológicos y políticos que puse como norte de mi vida profesional y personal.

Ante esos reprochables sucesos, es necesario y pertinente comunicarle a la opinión pública, lo siguiente:

1. Nunca he estado involucrado ni investigado, judicial y/o disciplinariamente, por actos de corrupción como servidor público, Juez de la República, docente universitario, ciudadano y abogado litigante por casi 40 años.

Es un hecho notorio, fui judicializado injustamente por los sucesos de la parapolítica, en las elecciones de Congreso del año 2002, cuando ni siquiera fui elegido. Aún tengo vigentes el ejercicio de derechos en otras instancias judiciales, nacionales e internacionales, por una rectificación de la justicia, donde con vigor pretendo reivindicar mi inocencia. Debo recordar, que, en 2002, como víctima, fui el único colombiano, que valientemente, denuncié y demandé, por escrito, ante el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, la intronización e imposición de candidatos por grupos ilegales en las elecciones de ese año.

2. No soy propietario ni poseedor de predios rurales como se puede constatar en cualquier Oficina de Instrumentos Públicos. Tampoco ganadero o agricultor. No soy accionista o representante legal o directivo de ninguna sociedad comercial, pudiéndose averiguar en la Cámara de Comercio. Mis ingresos personales, cuando no he estado en el servicio público, han sobrevenido, siempre, de mi ejercicio profesional como abogado, como se puede verificar ante la DIAN.

3. El patrimonio que pudieren tener alguno de mis familiares: hermanos y hermanas, mi esposa e hijos, incluso, mis sobrinos y sobrinas, insto, a quien lo quiera corroborar, investigue su procedencia.

4. No he sido jamás de los jamases, abogado de paramilitares ni de guerrilleros, menos de miembros de bandas criminales, no he apoderado a nadie en procesos judiciales relacionados con restitución de tierras, ni de reparación integral a víctimas del conflicto armado. No litigo en la jurisdicción penal.

5. Por mi talante severo y ético, a veces irreverente, vehemente, he fustigado, por décadas, la corrupción administrativa a través de los medios y en mis discursos políticos, defendiendo lo público y señalando, con nombres propios a presuntos responsables. En mi desempeño del derecho, dado mis posgrados, defendiendo y apoderando, preferentemente, en las jurisdicciones civil y de familia, a personas que reclaman justicia en derechos patrimoniales y herenciales.

6. Comprendí, con el tiempo, que el proceso judicial, que me montaron años atrás, fue para atajarme políticamente. Y después, del intento de homicidio perpetrado hace siete meses, he inferido, que mi crimen pretendía mi retiro definitivo de la política y el de mi ejercicio profesional como abogado, por mi proceder moral e insobornable. Asimismo, fue un mensaje para que familiares cercanos desistieran de cualquier aspiración electoral.

7. Deploro y condeno la violencia y el estado de criminalidad que arropa a mi Valledupar, territorio donde actualmente me siento intimidado y amenazado con mi familia, por mi fallido asesinato que intentarán completar y luego que, en panfletos, me magnifican, perversamente, como un siniestro corrupto asociado a bandas criminales.

8. Posterior a mi atentado, me he subordinado a un silencio estoico, por mi seguridad y la de mi familia. Debo informar, que este será, por ahora, el único pronunciamiento público que haré para no interferir en las investigaciones que adelantan los operadores judiciales del Estado. Imploro la comprensión, de esa decisión.



ÁLVARO MORÓN CUELLO